

Estados aplican escrupulosamente las reglas de derecho internacional y no desean que esas reglas se apliquen a sus nacionales de un modo distinto al que prevalece en sus propios países. Por ejemplo, Yugoslavia no autoriza que sus agentes diplomáticos y funcionarios consulares disfruten de los privilegios e inmunidades más amplios reconocidos por otros países, porque no desea que sus relaciones con tales países se conviertan en las de un acreedor y un deudor por lo que se refiere a los privilegios. El principio de la reciprocidad se basa en último término en la cortesía.

59. La interpretación del Sr. Erim se basa de hecho en las consideraciones de índole política que motivaron la aprobación del apartado a) del párrafo 2 por la Conferencia de Viena. Si los Estados no conceden a los agentes diplomáticos las disposiciones mínimas de la Convención de Viena, podrá invocarse el derecho de represalia. En su opinión, éste es un criterio peligroso, que es el resultado de la deficiente organización de la justicia internacional. Si son los gobiernos los llamados a juzgar sobre la existencia de violaciones de los instrumentos internacionales y de interpretaciones erróneas del derecho internacional, los abusos resultantes no tendrían término. Por otra parte, no cabe hacer la misma objeción al apartado b) del párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena. La Convención garantiza ciertos privilegios e inmunidades mínimos, y si la costumbre o el acuerdo entre los Estados reconoce un trato más favorable sobre una base bilateral y recíproca, puede teóricamente objetarse que un tercer Estado puede alegar la existencia de discriminación si no se extiende un trato análogo a sus cónsules; pero hay que tener presente que ciertas prácticas que se siguen en las relaciones entre algunos Estados no son admisibles en las relaciones entre otros Estados. Es preciso dejar algún margen al libre juego de las relaciones políticas y que las disposiciones mínimas de las convenciones constituyan la base de las relaciones diplomáticas y consulares, en la esperanza de que eventualmente habrá de implantarse un trato más liberal en todo el mundo.

60. El Sr. AGO hace observar que a la Comisión le corresponde alguna responsabilidad por la aprobación del apartado a) del párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena, porque en su décimo período de sesiones incluyó esa disposición en el artículo 44 del proyecto sobre relaciones diplomáticas (A/3859, Cap. III). Solamente en su duodécimo período de sesiones, cuando examinó un problema análogo en el proyecto sobre relaciones consulares, la Comisión se dio cuenta de los inconvenientes que ofrecía la disposición y manifestó la esperanza de que la Conferencia adoptara una decisión contraria a su inclusión.

61. No está de acuerdo con los argumentos expuestos por el Sr. Erim y el Sr. Matine-Daftary. El hecho, por ejemplo, de que un Estado conceda más o menos privilegios e inmunidades a los miembros de la familia, como se indica en el párrafo 2 del artículo 50, no puede decirse que corresponda a un criterio restrictivo o liberal de aplicación de la Convención, sino al simple ejercicio de una libertad total. Por otra parte, un Estado que conceda un trato más favorable que el exigido por las disposiciones de la Convención no aplicará en realidad

la Convención, e igual sucederá con el Estado que conceda un trato menos favorable. No existe una aplicación restrictiva y otra liberal, sino solamente una aplicación o una no aplicación y hablar de aplicación restrictiva equivale a sugerir a los Estados que pueden encubrir bajo esta expresión una transgresión real de los términos de la Convención.

62. Sir Humphrey WALDOCK dice que la opinión de la mayoría es contraria a la inclusión de una disposición análoga a la del apartado a) del párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena. Pero el hecho de que esta disposición haya sido aprobada en la Conferencia de Viena ofrece el peligro de que se incluya en la futura convención sobre relaciones e inmunidades consulares, únicamente por analogía. Tal vez sea conveniente, pues, incluir una versión distinta de esta disposición, a fin de exponer los límites máximos a los que puede llegar la Comisión y de tener en cuenta las objeciones formuladas por el Sr. Erim y por el Sr. Matine-Daftary. Los efectos de dicha disposición quedarían limitados exclusivamente a los casos en que se autorizara la aplicación de métodos distintos. No presentará, no obstante, una propuesta formal en favor de dicho nuevo párrafo.

63. El PRESIDENTE cree que una gran mayoría de la Comisión es partidaria de que se mantenga el artículo 64 en la forma en que fue aprobado en 1960. Propone que se remita este artículo al Comité de Redacción, con instrucciones de que aclare en el párrafo 1 que esta cláusula se refiere exclusivamente a las partes en la convención.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

609.ª SESIÓN

Martes 13 de junio de 1961, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Relaciones e inmunidades consulares (A/4425; A/CN.4/136 y Add.1 a 11, A/CN.4/137) (continuación)

[Tema 2 del programa]

distinción entre los Estados) (continuación)

ARTÍCULO 64 (Aplicación de los artículos sin hacer distinción entre los Estados) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el examen del proyecto sobre relaciones e inmunidades consulares (A/4425) y dice que el Sr. Matine-Daftary desea hacer una declaración acerca del artículo 64.

2. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, si bien no desea que se reanude el debate sobre la conveniencia de incluir en el artículo una disposición análoga al apar-

tado a) del párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (A/CONF. 20/13), desea recordar las opiniones que expresó sobre esta materia durante el duodécimo período de sesiones (548.^a sesión, párr. 78), cuando sugirió una enmienda radical a esta disposición. Desea reiterar, en todo caso, su opinión (608.^a sesión, párr. 55) de que si algún Estado interpreta con criterio restrictivo una cláusula de la convención, no por eso queda la convención quebrantada: de lo que tratará de convencer a sus colegas en el Comité de Redacción.

ARTÍCULO 65 (Relación entre los presentes artículos y las convenciones bilaterales)

3. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que las dos versiones presentadas a los gobiernos fueron objeto de un debate en la Sexta Comisión, durante el decimoquinto período de sesiones de la Asamblea General, al que ha aludido en su tercer informe (A/CN.4/137, comentario al artículo 65). De los gobiernos que han enviado observaciones escritas, sólo el de Chile prefiere la primera versión (A/CN.4/136/Add.7); los Gobiernos de Noruega, la Unión Soviética, Chocoeslovaquia, los Estados Unidos, Polonia, Bélgica, España y Suiza (A/CN.4/136 y Add.2, 3, 5, 6, 8 y 11) han expresado su aprobación general de la segunda versión, y el Gobierno de los Países Bajos ha presentado en detalle los motivos que tiene para apoyar dicho texto (A/CN.4/136/Add.4). Otros gobiernos han tomado una posición intermedia o se han reservado su opinión sobre el asunto. Por ejemplo, el Gobierno de Filipinas (A/CN.4/136) ha indicado que su preferencia por la variante que subordina los acuerdos bilaterales a la Convención dependerá de que se acepten sus reservas a otros proyectos de artículos. El Gobierno del Japón reserva simplemente su posición con respecto al artículo (A/CN.4/136/Add.9). Por último, el Gobierno de Yugoslavia (A/CN.4/136) estima que el primer texto es más aceptable y que se le podría completar con una cláusula de excepción acerca de las garantías mínimas que se estipulan en el proyecto, o bien destacar que pueden concertarse otras convenciones siempre que, por lo menos, no sean contrarias a los principios fundamentales establecidos en el texto. Esa solución corresponde más o menos a la declaración que se hace en el párrafo 2) del comentario; a ese respecto, señala que para el Gobierno de los Países Bajos el principio que se expone en ese comentario, aunque tal vez correcto en teoría, es irrealizable en la práctica.

4. Habida cuenta de estas observaciones, cree que la Comisión debe adoptar la segunda versión del artículo sin prolongar mucho el debate. Debe, sin embargo, declararse sobre un punto y es la sugestión del Gobierno de los Países Bajos de agregar las palabras «y multilaterales». En su duodécimo período de sesiones la Comisión manifestó claramente su propósito de mantener en vigor sólo las convenciones bilaterales. El objeto del proyecto es en efecto codificar las normas esenciales del derecho consular. No se podría alcanzar esa finalidad si hubieran de mantenerse en vigor otras convenciones multilaterales, pues o bien las disposiciones de dichos instrumentos serían análogas a las de la convención general, y en ese caso resultarían innecesarias, o inclui-

rían disposiciones distintas de las del derecho consular unificado que la Comisión trata de establecer, y entonces constituirían un obstáculo para la unificación del derecho consular (véase el documento A/CN.4/137, comentario al artículo 65). Ha de señalarse que la disposición no excluye la posibilidad de que se concierten en lo futuro convenciones regionales sobre la materia (y la observación del Gobierno de los Países Bajos se refiere a dichas convenciones); pero respecto a los instrumentos vigentes, el artículo 65 debe limitarse, a su juicio, sólo a las convenciones bilaterales para que pueda alcanzarse el fin principal que se persigue al preparar una convención que codifique el derecho consular mundial.

5. El Sr. AGO recuerda que, durante los prolongados debates que se celebraron sobre el asunto en el duodécimo período de sesiones, algunos miembros argumentaron con insistencia que, una vez codificado el derecho internacional sobre las relaciones consulares, el nuevo código debía reemplazar automáticamente todas las demás convenciones en esta materia, fundándose en que algunas de las normas enunciadas en el nuevo código eran imperativas y no podían ser derogadas por un acuerdo bilateral. El mismo sugirió en última instancia que las dos versiones del artículo se sometieran a los gobiernos (576.^a sesión, párrs. 4 y 5, el artículo era entonces el 59). En aquel momento sus preferencias iban hacia la primera versión, pero después de conocer las respuestas recibidas de los gobiernos ha llegado a la conclusión de que el segundo texto es, en definitiva, preferible pues elimina las dificultades prácticas (tales como el análisis de los tratados vigentes, reapertura de negociaciones y otras) que impondría el primer texto. Además, la segunda versión ofrece la ventaja de conformarse al principio de que lo particular prevalece sobre lo general. En la práctica, los Estados que encuentren las disposiciones del nuevo código preferibles a las de los acuerdos bilaterales introducirán las modificaciones del caso en su sistema de relaciones consulares. No obstante, de elegirse la segunda versión, no puede estar de acuerdo con el Relator Especial en que debe hacerse una distinción entre las convenciones vigentes bilaterales y las vigentes multilaterales. O todo el derecho vigente en la materia debe quedar en vigor, o hay que reemplazarlo en su totalidad; pero no puede decirse que las convenciones vigentes permanecerán en vigor si han sido firmadas por dos Estados y en cambio caducarán si han sido firmadas por un número mayor. En el caso de un tratado multilateral, si el grupo de Estados que lo ha concluido encuentra que sus disposiciones son menos satisfactorias que las de la convención general, tomarán las medidas del caso para reemplazar su propio sistema por el general. Por lo tanto, la sugestión que hace el Gobierno de los Países Bajos a este respecto constituye la conclusión lógica de la aprobación del segundo texto.

6. El Sr. EDMONDS dice que el artículo 65 es una de las disposiciones más importantes del proyecto. La Comisión prepara una convención en la esperanza de que pueda emplearse y de que constituya un desarrollo progresivo del derecho internacional en materia de relaciones consulares. El número de convenciones vigentes en este campo es muy vasto; además, por lo común, los abogados

son conservadores, los abogados internacionalistas lo son aún más, y los abogados internacionalistas que forman parte de los ministerios de relaciones exteriores son los más conservadores de todos. Lo cual es perfectamente natural, pues si una convención bilateral ha resultado satisfactoria durante muchos años, es lógico que un Estado vacile antes de introducir cualquier cambio en sus disposiciones. Lo único que puede hacer la Comisión si desea asegurar el mayor número de ratificaciones es disponer que las convenciones vigentes podrán mantenerse y que podrán concertarse otras. Además, la Comisión ha decidido deliberadamente no ocuparse de ciertos aspectos del derecho consular. Si se aprueba una disposición flexible, los Estados que creen que los artículos de la Comisión constituyen un desarrollo progresivo del derecho internacional, tarde o temprano se ajustarán a los artículos de la convención general. Si la ratificación de la convención general significa que no podrán conservar sus obligaciones bilaterales vigentes, estarán mucho menos dispuestos a ser partes en ella. Aunque puede parecer conveniente que la convención general rijan todo el derecho consular, resulta poco práctico incluir una disposición indebidamente estricta. Siempre es difícil determinar si un contrato contradice a otro, pero tal determinación no será necesaria si la Comisión aprueba el segundo texto. Ello permitirá a muchos Estados ver las ventajas de armonizar sus relaciones consulares con la convención general y, con ello, seguir el camino trazado por la Comisión.

7. El Sr. YASSEEN estima que el artículo 65 pone en juego el objeto mismo de la codificación. Es sabido que una de las finalidades de la codificación es la uniformización del derecho, y por ello es especialmente necesario salvaguardar los principios fundamentales enunciados en una convención general codificadora.

8. Al elaborar un proyecto de convención sobre derecho consular, la Comisión ha de cuidar de no introducir en el mismo un germen que pueda destruir toda su obra. Evidentemente, no todos los artículos del proyecto enuncian principios fundamentales de derecho internacional, pero algunos de ellos, como por ejemplo el artículo que prevé la inviolabilidad de los archivos consulares y el que formula la libertad de comunicación, sí que lo hacen y por ello merecen ser conservados y protegidos. Así pues, la Comisión puede decidirse por el primer texto o por el segundo, y en opinión del Sr. Yasseen el segundo resultaría más práctico, pero cualquiera que sea la decisión de la Comisión, debería añadir una cláusula salvaguardando los principios fundamentales de la convención en conformidad con la tercera solución formulada por determinados miembros de la Comisión en el décimo período de sesiones (576.ª sesión, párrs. 2 a 7). Desde el punto de vista técnico nada se opone a la adopción de esa solución, ya que el principio *lex posterior derogat priori* no es imperativo y los Estados pueden estipular que una convención ya existente entre ellos continuará vigente, a pesar de futuras convenciones —*lex prior derogat posteriori*. Varios Estados se declararon en favor de ese sistema en la Sexta Comisión y, además, el Gobierno de Yugoslavia ha sugerido que se agregue una cláusula de esa clase.

9. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la

Comisión, dice que el primer texto no sólo es oscuro sino indefendible en teoría. Un tratado puede establecer normas que constituyan *jus cogens*, pero ese hecho no impide a los Estados concertar tratados sobre el mismo asunto. El hecho de que ciertas normas constituyan *jus cogens* sólo quiere decir que los Estados no pueden menoscabarlas, pero no impide a los Estados ir más allá de esas normas obligatorias.

10. Sin duda está en aumento el número de normas que constituyen *jus cogens* en el derecho internacional moderno; tales normas se refieren a los problemas básicos de las relaciones internacionales y del mantenimiento de la paz, así, por ejemplo, la norma de la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la del respeto de la soberanía del Estado, etc. Por contraste, sería muy difícil sostener que el proyecto que ahora se discute contiene normas de esa clase. La Comisión deber tener cuidado de no ir más lejos de lo necesario y de elegir la solución que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, ofrezca mayores posibilidades de fomentar el desarrollo progresivo del derecho internacional. Las observaciones de los gobiernos demuestran una preferencia clara por la segunda versión. También cree el orador que ese texto es mucho más práctico que el primero, y mucho menos controvertible.

11. Con respecto al texto de la segunda versión, está de acuerdo con el Sr. Ago en que debe extenderse a las convenciones multilaterales. Desde el punto de vista lógico, no ve cuál es el inconveniente de permitir que sigan en vigor las convenciones regionales si los Estados partes en ellas lo desean. Sugiere que se reemplace la palabra «bilaterales» por la palabra «vigentes» que abarcará todas las convenciones en vigor.

12. El Sr. FRANÇOIS dice que le satisface que el Sr. Ago no mantenga ya los argumentos que a favor de la primera versión expuso en el duodécimo período de sesiones. Por su parte, aunque prefiere la segunda versión, no encuentra la primera tan criticable como el Presidente. Ese texto sería perfecto si los Estados estuviesen realmente dispuestos a admitir que todas las convenciones que anteriormente hubiesen concertado sobre el particular quedasen derogadas por la convención general. En el caso de que lo hiciesen, la situación tendría algunas ventajas teóricas, pero los inconvenientes para la aplicación práctica de las disposiciones serían mucho mayores. Se inclina, pues, a favor de la segunda versión.

13. Sin embargo, está de acuerdo con el Presidente en que la solución intermedia propuesta por el Sr. Yasseen es impracticable. La importancia fundamental del artículo 65 radica, no tanto en los principios generales establecidos en el proyecto, sino en el problema total de la limitación de sus disposiciones. En la práctica, sería imposible distinguir entre los principios fundamentales de *jus cogens* estipulados en el instrumento, y los principios de que los Estados podrían apartarse. Por ese motivo, la adición que se propone sería inútil.

14. También está de acuerdo con el Sr. Ago y con el Presidente en que el artículo debe ser aplicable a las convenciones multilaterales, puesto que si se las excluyese cabría derogar todas las convenciones regionales exis-

tentes y concertarlas de nuevo en los mismos términos, inmediatamente después de que entrase en vigor la nueva convención general. Por otra parte, el Relator Especial ha señalado acertadamente que las disposiciones de las convenciones multilaterales regionales que fuesen incompatibles con las del proyecto de la Comisión contrarrestarían en gran parte los esfuerzos de ésta para alcanzar su finalidad fundamental, que es la codificación del derecho internacional. Las instituciones jurídicas regionales deberían proceder con gran cautela, especialmente en lo por venir, al preparar nuevos acuerdos. Considera muy deplorable, por ejemplo, que la Comisión Jurídica del Consejo de Europa haya empezado a preparar una convención europea sobre relaciones consulares antes de que la Comisión haya terminado sus trabajos en esa materia. Sería muy conveniente que el Relator Especial lo hiciese constar así en su informe.

15. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA se inclina también a favor de la segunda versión que, además, ha obtenido la aprobación de la mayoría de los gobiernos. Está de acuerdo, sin embargo, con el Gobierno de Noruega en que no hay razón alguna para que la disposición se aplique únicamente a las convenciones bilaterales, puesto que las mismas consideraciones generales son aplicables también a las convenciones y acuerdos multilaterales. Además, como el Relator Especial señala acertadamente en su tercer informe, con gran frecuencia se incluyen disposiciones sobre relaciones e inmunidades consulares en convenciones relativas a otras materias. Debe modificarse, por tanto, el texto de la segunda versión, haciendo referencia a aquellas disposiciones de los tratados que se refieran a relaciones consulares.

16. Está también de acuerdo con los miembros de la Comisión que han insistido en que el artículo haga referencia no sólo a las convenciones y acuerdos bilaterales, sino también a los multilaterales, puesto que, en caso contrario, el artículo 65 se apartaría de otras disposiciones del proyecto que aluden a ambos tipos de acuerdos. Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 64 podría indudablemente ser aplicable tratándose de convenciones multilaterales y, en tal caso, el excluirlas implícitamente del artículo 65 es ilógico. Desde el punto de vista práctico, la omisión puede ser también interpretada como un intento de derogar las disposiciones de las convenciones multilaterales existentes que no estén en conflicto con las del proyecto que se examina; tal interpretación podría dificultar en bastantes regiones la ratificación del instrumento.

17. En cuanto a la sugestión del Sr. Yasseen, está de acuerdo con el Sr. François y con el Presidente en que sería difícil para la Comisión determinar qué disposiciones del proyecto constituyen principios fundamentales de derecho internacional. Por lo que respecta a las relaciones e inmunidades consulares, no cree que haya principios de política general de los cuales no puedan apartarse los Estados en cualquier momento; sólo normas como la establecida en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que se refieren a problemas fundamentales de seguridad internacional, pueden ser consideradas como principios de *jus cogens*. Además, los Estados no estarán dispuestos a renunciar, en los acuerdos que firmen, a los principios fundamentales del

derecho consular que se derivan del derecho internacional consuetudinario.

18. Sir Humphrey WALDOCK se declara también a favor de la segunda versión del artículo 65, por las mismas razones que el Gobierno de los Países Bajos. Si no se adoptase un texto similar, sería muy difícil conseguir la ratificación de la convención. El proyecto no representa simplemente una codificación del derecho consuetudinario en la materia; por el contrario, muchas de sus disposiciones pueden considerarse como innovaciones cuya validez dependerá de que los Estados las acepten. Puede decirse, además, que la entrada en vigor de la convención, una vez aprobada, dependerá de que se deposite un número suficiente de instrumentos de ratificación. Debe recordarse que hasta ahora únicamente cinco Estados de los 22 necesarios han ratificado un instrumento relativamente tan poco discutible como la Convención sobre la Alta Mar (A/CONF.13/L.53). Así pues, conviene evitar en la presente convención todo lo que pueda impedir que se la ratifique.

19. Está de acuerdo con los anteriores oradores en que el artículo 65 debe ser aplicable no sólo a los acuerdos bilaterales sino también a los multilaterales, y, como el Sr. François, deplora que la Comisión Jurídica del Consejo de Europa haya empezado a preparar una convención sobre relaciones consulares antes de que la Comisión haya terminado sus trabajos sobre la misma materia. Es cierto que los progresos de dicha Comisión Jurídica no son muy rápidos, pero no cabe duda de que la labor de la Comisión de Derecho Internacional sería muy criticable si la convención europea se apartase mucho de la convención general por ella preparada.

20. Respecto a la sugestión del Sr. Yasseen, señala a la atención la dificultad de determinar cuáles son los principios fundamentales que hay en el proyecto, teniendo en cuenta que las relaciones consulares se basan *per se* en el consentimiento de los Estados interesados. Es evidente que en el proyecto figuran algunos principios fundamentales: por ejemplo, el de la inmunidad de los funcionarios consulares por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, y el de la libertad de comunicación son principios de derecho internacional general. Es poco probable, sin embargo, que haya tratados bilaterales que explícitamente se aparten de esos principios.

21. En cuanto al texto de la segunda versión, hace notar la ambigüedad de la frase «dejan a salvo las convenciones bilaterales». Del debate celebrado en el duodécimo período de sesiones no se deduce claramente qué opina la Comisión respecto de la relación de la convención general con los acuerdos bilaterales. No está claro si la convención general ha de quedar totalmente desplazada por las convenciones ya existentes, o si ello sólo puede ocurrir hasta un cierto punto. A su juicio, la convención general debe prevalecer sobre las disposiciones de los acuerdos bilaterales, excepto cuando las cláusulas de esos acuerdos lo impidan expresamente. La Comisión no ha expresado claramente su opinión sobre este particular en el texto del proyecto. Por su parte, cree más bien que debe hacerse referencia al hecho de que la aceptación de los artículos no anulará las con-

venciones bilaterales existentes y no impedirá que se concierten otras convenciones en lo por venir.

22. El Sr. VERDROSS hace notar que los gobiernos se inclinan a favor de la segunda de las dos versiones que se proponen, que es, por tanto, la que debe aprobar la Comisión.

23. Queda el problema de determinar si el artículo debe decir expresamente que en el proyecto de convención hay principios fundamentales de derecho consular que deben prevalecer sobre los acuerdos bilaterales, y de los cuales no deben apartarse los acuerdos bilaterales posteriores. A este respecto, dice que la expresión «principios fundamentales» no es bastante clara; el artículo debe establecer que el proyecto contiene ciertos principios imperativos o de *jus cogens*, es decir, disposiciones legales en materia consular que deben ser respetadas.

24. Toma nota con satisfacción de las palabras del Presidente reconociendo la existencia de principios de *jus cogens* en derecho internacional y enunciando que el número de éstos tiende a aumentar. Por su parte, siempre ha sostenido la existencia de tales principios y ha rebatido la opinión del Profesor Paul Guggenheim, de que todas las disposiciones de derecho internacional son de *jus dispositivum* y que los Estados gozan de entera libertad para apartarse de ellas en las convenciones bilaterales que concierten.

25. Si no se incluye en el artículo 65 una declaración como la que él ha sugerido, el texto de la segunda versión podría interpretarse en el sentido de que todos los artículos del proyecto constituyen disposiciones de *jus dispositivum*, de las que los Estados pueden apartarse libremente.

26. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que, desde el punto de vista práctico, la segunda versión es preferible para los Estados de Europa y de América, que ya han firmado convenciones multilaterales y bilaterales por las que se rigen sus relaciones consulares.

27. Las dos versiones son análogas en el sentido de que tanto la una como la otra permiten a los Estados americanos seguir con su propio sistema, establecido en la Convención relativa a los agentes consulares, firmada en La Habana en 1928¹, y a los Estados europeos con las normas estipuladas en las numerosas convenciones bilaterales que han concertado. Evidentemente, los Estados europeos parecen estar a punto de adoptar un sistema multilateral característico. Así pues, el resultado de los trabajos de la Comisión parece destinado exclusivamente a los países de Asia y de África. Si se aceptase la segunda versión, los Estados de Europa y de América no tendrían ni siquiera que molestarse en declarar explícitamente qué convenciones anteriormente concertadas seguirían en vigor.

28. Le decepcionan francamente los resultados de los trabajos de la Comisión, que no corresponden a la finalidad prevista en el apartado a) del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas. En virtud de dicha disposición de la Carta, que constituye

la razón de ser de la Comisión, la misión de ésta es impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación.

29. Lo menos que podría hacerse es adoptar una disposición análoga a la sugerida por el Sr. Verdross, estableciendo que los acuerdos bilaterales no podrán apartarse de las disposiciones del proyecto de artículos que constituyan principios de *jus cogens*.

30. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que, teóricamente, la aplicación del principio de la *lex posterior*, a que han aludido el Presidente y el Sr. Ago, no ofrece dificultades.

31. Si la Comisión hubiese aprobado la propuesta del Relator Especial sobre el artículo 4 y hubiera incluido en el proyecto una explicación detallada de las funciones consulares, el problema estaría, al menos en parte, resuelto. La Comisión no ha intentado, sin embargo, unificar con gran detalle todos los principios que rigen las relaciones consulares ni, mucho menos aún, ha intentado unificar todas las convenciones consulares existentes. Tampoco ha emprendido una codificación que se extienda a todas las ramas del derecho consular.

32. En tales circunstancias, no cabe duda alguna de que el proyecto de artículos no puede sustituir a las convenciones bilaterales existentes, ni procede hablar de la ley preferente, conforme al Artículo 103 de la Carta, o del principio de los tratados incompatibles, conforme al artículo 19 del Pacto de la Sociedad de las Naciones.

33. Existen evidentemente ciertos principios imperativos o fundamentales, como el de la inmunidad de jurisdicción de los cónsules por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales, a que ha hecho referencia Sir Humphrey Waldock; pero esos principios son de derecho internacional consuetudinario y siempre pueden ser invocados independientemente de que se estipule así o no en el proyecto de convención.

34. Quizá fuese útil mencionar los antecedentes del artículo 65. La convención de La Habana relativa a los agentes consulares contiene, como artículo 24, un texto similar a la segunda versión del artículo 65 del proyecto de la Comisión. El proyecto de Harvard sobre condición jurídica y funciones de los cónsules, preparado por el Sr. Quincy Wright, dice en su artículo 33:

«Las disposiciones de la presente convención dejan a salvo aquellos acuerdos en vigor entre las partes, que confieran funciones especiales a los cónsules; esta convención no impedirá tampoco a ninguna de las partes concertar acuerdos incompatibles con sus disposiciones, siempre que ello afecte exclusivamente a los intereses de las partes en dichos acuerdos.»²

35. Es interesante observar que el proyecto de Harvard trata de mantener en vigor las disposiciones de los acuerdos que confieran «funciones especiales» a los cónsules, pero no otras, como las relativas a privilegios e inmunidades. Las convenciones consulares ya exis-

¹ Sociedad de las Naciones, *Recueil des Traités*, Vol. CLV, 1934-1935, N.º 3582, págs. 290 a 303.

² *Harvard Law School, Research in International Law (II) The Legal Position and Functions of Consuls*, Cambridge, Mass., 1932, pág. 369.

tentes sobre el particular quedarían anuladas. Este sistema es menos riguroso que el del proyecto de la Comisión.

36. Sir Humphrey Waldock ha señalado la necesidad de examinar la segunda versión para que quede claro el sentido de la expresión «dejan a salvo». Si esas palabras se interpretasen en sentido estricto, el proyecto de convención multilateral dejaría a salvo las convenciones bilaterales ya existentes, pero, en virtud de la teoría de la *lex posterior*, podría afectar, y de hecho afectaría, a ciertas disposiciones de los tratados anteriormente concluidos. Por ejemplo, si en una convención consular bilateral hubiese disposiciones sobre imposición fiscal, y los dos países interesados firmaran más tarde el instrumento multilateral, las disposiciones de éste sobre el particular dejarían sin efecto a las de la convención bilateral anterior, resultado que quizá no fuera el apetecido.

37. El PRESIDENTE dice que en el presente estado del derecho internacional y en las actuales circunstancias resulta difícil imaginar que se concierte una convención con una cláusula en la que se excluyo toda posibilidad de concertar en lo futuro acuerdos sobre el mismo tema. Refiriéndose a la exposición del Secretario ante la Comisión, manifiesta que no cabe sugerir que todas las reglas del derecho internacional consuetudinario constituyen *jus cogens*. Los Estados pueden, por mutuo consentimiento, cercenar muchas reglas de derecho internacional consuetudinario. Sólo algunas de estas reglas, a las que aludió en su declaración previa, puede decirse que son *jus cogens*.

38. No ve ninguna razón para dar carácter de *jus cogens* a ninguna de las reglas incluidas en el proyecto de artículos. Su oposición se basa sobre todo en consideraciones de índole práctica; si se incluye una disposición como la que han sugerido algunos miembros, será difícil que muchos Estados acepten el proyecto de artículos.

39. El Sr. BARTOŠ manifiesta que el proyectado texto del artículo 65 socava toda la estructura del proyecto. Su aprobación significaría que la Comisión renunciaba a recoger los frutos de sus trabajos. La Comisión se ha esforzado mucho por preparar un proyecto de artículos que reflejara la práctica que actualmente siguen los Estados. Procedió así con el propósito de unificar el derecho internacional en la medida de lo posible, y no puede decir ahora que la labor de codificación preparada no obligará a los Estados. No se ha pedido a la Comisión que prepare artículos modelos sobre las relaciones consulares, sino que codifique el derecho internacional en la materia.

40. Independientemente de la terminología que se emplee, y de si se hace referencia al *jus cogens*, a las reglas básicas o a los principios fundamentales, no cabe duda que el proyecto de artículos enuncia ciertas reglas mínimas y obligatorias. Esto es exacto, por ejemplo, en relación con las reglas sobre la inmunidad de los cónsules cuando se trate de actos ejecutados en el desempeño de sus funciones oficiales, así como también acerca de las que tienen por objeto salvaguardar el libre funcionamiento de los consulados. La Comisión no puede,

sin renunciar a sus obligaciones respecto a las Naciones Unidas y al derecho internacional, invitar tácitamente a los Estados, como lo hace el artículo 65, a que cercenen a discreción las disposiciones del proyecto de artículos.

41. Opina que la soberanía de los Estados no les permite que, después de haber firmado una convención general, concierten acuerdos especiales que se aparten de las disposiciones de aquélla sin haberla denunciado previamente. A su juicio, el Estado que acepta determinadas obligaciones internacionales en virtud de una convención, como resultado de ella y en lo que se haya obligado, limita el ejercicio de sus derechos soberanos.

42. Apoya decididamente la fórmula de transacción propuesta por el Sr. Verdross, que garantizará los principios que sean imperativos, sin perjuicio de la libertad de los Estados para concertar acuerdos especiales sobre otras materias, tales como la extensión de las funciones consulares. Para que los consulados funcionen como una institución, se requiere la observancia de ciertas normas de derecho internacional positivo que la Comisión ha formulado cuidadosamente en el curso de su prolongada labor; insta a la Comisión a que no dé plena libertad a los Estados para apartarse de tales normas.

43. El Sr. AGO dice que las convenciones vigentes tienen un ámbito geográfico mucho más extenso que el sugerido por el Sr. Matine-Daftary. Italia, por ejemplo, ha concertado una convención consular bien conocida con otro Estado europeo: la convención consular recientemente concertada con el Reino Unido. Pero existen muchas disposiciones sobre asuntos consulares en los tratados y en otras convenciones concertadas por Italia con los países de Asia y de otros continentes.

44. Lo que la Comisión ha de decidir es si existen o no en la presente convención principios de *jus cogens*, es decir, principios que invaliden toda disposición de una convención posterior que sea incompatible con dichos principios. A su juicio, tales principios pueden existir en el derecho internacional, pero, naturalmente, no son muchos. Entre ellos podrían contarse, por ejemplo, los que se refieren al respeto debido a la integridad de la soberanía de los Estados, a las consecuencias de un hecho ilícito o a la libertad de la alta mar. Esos pocos principios están reconocidos en el derecho internacional consuetudinario; pero es dudoso que existan normas de *jus cogens* creadas por una Convención y estima que en la presente convención no hay ninguna.

45. Le ha impresionado mucho la argumentación de Sir Humphrey Waldock. Será preciso aclarar el texto del artículo 65, a fin de indicar que si existiesen convenciones bilaterales previas ello no será obstáculo para que la nueva convención multilateral produzca efectos entre las partes en las mencionadas convenciones bilaterales. Sólo en lo que respecta a las materias realmente comprendidas en las disposiciones de la convención bilateral previa, y que a menudo serán normas limitadas, no serán de aplicación las reglas de la convención multilateral en virtud del principio de que la ley especial deroga a la general.

46. Por último, estima innecesario y peligroso hacer declaración alguna sobre la posibilidad de concertar en lo futuro convenciones sobre relaciones consulares. Es

lógico que se defina la situación en lo que respecta a las convenciones vigentes, pero no es necesario referirse a los acuerdos futuros. Nunca se ha pensado que una convención pueda establecer reglas que duren eternamente. Resulta ciertamente equivocado creer que los Estados signatarios de una convención renuncian con ello al derecho de concertar otras.

47. También será peligrosa cualquier referencia a las convenciones futuras porque, como ha indicado el Sr. Bartos, sería apartarse de la finalidad perseguida en la codificación del derecho consular. La finalidad de la labor de la Comisión no es otra que esforzarse por unificar ciertas normas de derecho internacional dispersas en multitud de textos, difíciles a veces de encontrar. La Comisión deberá abstenerse, por tanto, de señalar en demasía a la atención de los Estados su incuestionable derecho a concertar otras convenciones en lo futuro. Por el contrario, en el comentario se debería, en primer lugar, sugerir que los Estados revisen las convenciones vigentes a fin de determinar hasta qué punto conviene mantenerlas; y en segundo lugar, expresar la esperanza de que los Estados se abstengan en lo futuro de concertar convenciones que se aparten considerablemente de los principios enunciados en el proyecto de artículos.

48. El Sr. PAL hace observar que en el duodécimo período de sesiones la Comisión se refirió a una cuestión que acaba de plantear Sir Humphrey, pero que tal vez no haya examinado con suficiente detalle. Recuerda a la Comisión cómo interpretó entonces Sir Gerald Fitzmaurice esta disposición, y la conclusión que el orador sacó de dicha interpretación (560.^a sesión, párrs. 13 y 14). La conclusión final de la Comisión fue que las disposiciones del proyecto no afectarán a las disposiciones correspondientes de las convenciones bilaterales, y que a las cuestiones no resueltas en las convenciones bilaterales se aplicará la convención multilateral (véase el párrafo 2 del comentario al artículo 65).

49. El Sr. AMADO declara que los debates del duodécimo período de sesiones tomaron una orientación un tanto teórica y dieron lugar a algunas opiniones algo radicales. Por ejemplo, el Sr. Scelle defendió la tesis de que las partes contratantes en una convención general ne pueden concertar una convención particular contraria a la primera, al menos que la denuncien (561.^a sesión, párr. 19). El orador, personalmente, manifestó que sería deplorable que la Comisión elaborara un conjunto de normas modelo y no una convención multilateral, y calificó la disposición que se está examinando de método nuevo de permitir que los signatarios formulen una reserva general (560.^a sesión, párrs. 50 y 51). También deploró que Sir Gerald no intentase examinar los argumentos expuestos por el Sr. Bartos y el Sr. Scelle y prefiriese en cambio estudiar la cuestión desde un punto de vista puramente práctico (*ibid.*, párr. 52).

50. Hizo ver en una fase ulterior del debate, en el duodécimo período de sesiones, que el proyecto servirá de punto de unión entre los Estados, pero que si el instrumento se declara abierto a la firma con una cláusula de excepción que deje a todos los signatarios en libertad para no cumplir sus disposiciones, la unificación del derecho internacional en materia de relaciones e inmu-

nidades consulares, que debe ser la finalidad perseguida, quedará retrasada. En consecuencia, se opuso a que se incluyera una disposición concerniente a la relación entre el proyecto y las convenciones previas (561.^a sesión, párr. 35).

51. Le parece improcedente hablar de *jus cogens* refiriéndose a relaciones consulares en las que caben ligeras diferencias de opinión. Tampoco cree que la Comisión debe conservar la referencia a las convenciones futuras, ya que los Estados no aceptarán su dictado a este respecto.

52. Sin embargo, es partidario de una disposición análoga a la sugerida por Sir Humphrey Waldo.

53. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que la Comisión parece inclinarse por la segunda versión. Es preciso interpretar ese texto en el sentido de que cuando dos partes contratantes no estén obligadas por una convención consular previa, se aplicará la convención multilateral en su totalidad. Pero si previamente han concertado una convención bilateral, entonces seguirán siendo válidas las disposiciones de dicha convención, y cualquier cuestión que no resuelva la convención bilateral se decidirá conforme a lo dispuesto en la convención multilateral.

54. Asegura al Sr. Matine-Daftary, quien parece restar importancia a la convención multilateral, que aun en el caso de que se incluya el artículo 65, el proyecto tendrá considerable influencia y autoridad. La Convención tendrá un gran poder de persuasión en sí misma y probablemente servirá como base para futuras convenciones bilaterales, incluso para Estados no signatarios que acudirán a ella como fuente de normas esenciales. Además, es preciso insistir en que las convenciones consulares vigentes abarcan un sector relativamente reducido de las relaciones consulares. Para demostrarle basta observar que incluso los viejos Estados no han concertado con otros Estados más de diez o veinte convenciones de ese tipo, y que actualmente hay en el mundo más de cien Estados. El proyecto tendrá, también por tanto, una importancia práctica inmediata.

55. Será extremadamente difícil, y además innecesario, establecer una distinción entre las disposiciones que constituyen reglas de *jus cogens* y las que lo son de *jus dispositivum*. Los Estados han sido ya invitados a que formulen observaciones sobre las dos variantes propuestas para el artículo 65, y les sorprendería mucho que se les presentara una tercera variante que probablemente no aceptarán. Puede incluir en el comentario una declaración en el sentido de que la Comisión confía en que las convenciones que se concierten en lo futuro se basen en el presente texto.

56. El Sr. GROS señala que una disposición como la que ahora se examina figura en muchas convenciones multilaterales. Un ejemplo destacado de un instrumento internacional que debe aceptarse tal como está, sin aludir a la vigencia de las convenciones existentes, es la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (A/CONF.13/L.52), que, al crear nuevas normas, constituyó una verdadera contribución al desarrollo progresivo del derecho internacional; sin embargo, hasta esa Convención incluye una cláusula (artículo 25) en la

que se reconoce la validez de las convenciones y otros tratados internacionales en vigor.

57. Tal vez el debate haya excedido los límites del artículo 65, lo que a él le parece útil y hasta necesario por razones de orden práctico. No hay que tener temor a adoptar un punto de vista pragmático en materia de codificación y esta actitud no menoscaba en nada el respeto debido a la tesis tan magistralmente desarrollada por el Sr. Scelle. El estado actual de las relaciones consulares ha sido bien descrito por el Sr. Ago. Algunos Estados tienen un sistema de relaciones consulares bien establecido, formulado en convenciones y prácticamente mundial, pero para otros, sobre todo para los nuevos Estados independientes, una convención multilateral tendría particular importancia. Está de acuerdo con el Relator Especial en que el proyecto, tanto si llega a ratificarse como en el caso contrario, tendrá una significación considerable. El hecho de que, por otra parte, la Convención de 1958 sobre la Alta Mar, en la que no existe —que el orador sepa— ningún nuevo elemento de derecho, no haya sido ratificada, no disminuye en nada su valor.

58. El mundo no ha llegado a una situación en que una autoridad legislativa internacional pueda imponer legislación a los Estados. Como el Relator Especial ha indicado, la tarea esencial de la Comisión es persuadir, y cree firmemente que, en el caso presente, el artículo 65 no disminuye la fuerza del proyecto, que o bien será aceptado oficialmente por los Estados que no tienen todavía convenciones consulares, o bien será empleado como base para la conclusión de convenciones bilaterales. Así pues, el texto, por su mera existencia, tendrá una gran importancia y marcará un punto decisivo en el desarrollo de las relaciones internacionales.

59. El Sr. ERIM es partidario de la segunda versión del artículo 65, pero está de acuerdo con otros miembros en que la redacción es ambigua y puede interpretarse de distintos modos. El párrafo 2) del comentario no parece concordar con el texto del propio artículo.

60. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la Comisión, dice que, según la segunda versión, la convención multilateral no abrogará los convenciones bilaterales vigentes.

61. El Sr. PADILLA NERVO hace suyas las opiniones expresadas por el Sr. Verdross, el Sr. Bartos y el Sr. Amado, y también está de acuerdo con el análisis hecho por Sir Humphrey Waldock del significado de la segunda versión. Como en el caso del apartado a) del párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena, cree que el artículo 65 es innecesario y que se le debería suprimir, pues ni agrega ni modifica nada a los poderes de los Estados. No le ha parecido muy convincente el argumento del Relator Especial de que, como se han sometido dos textos alternativos a los gobiernos para que presenten sus observaciones, éstos esperarán que se incluya alguna disposición acerca de la relación entre el proyecto y las convenciones multilaterales. Puede mencionarse el problema en el comentario a fin de ayudar a una futura conferencia de plenipotenciarios a que llegue a una decisión.

62. Comparte las dudas expresadas en el duodécimo período de sesiones por el Sr. García Amador (560.^a sesión, párr. 9) en cuanto a la conveniencia de incluir una disposición general que tenga el carácter de una cláusula final.

63. La Comisión ha tratado de codificar el derecho y también de dar algún ímpetu al desarrollo progresivo del derecho en una dirección liberal. En sus referencias a las disposiciones de diversas convenciones consulares, ha citado las que eran liberales más bien que las restrictivas. Está convencido de que el proyecto ejercerá una influencia más eficaz, sobre todo en los nuevos Estados que tal vez estimen que no han participado en la creación de algunas de las normas vigentes en el campo de las relaciones consulares, si se suprime el artículo 65. Está de acuerdo con el Sr. Gros en que, independientemente del número de ratificaciones, el proyecto resultará valioso.

64. El Sr. FRANÇOIS señala que la Comisión se abstuvo de insertar en su proyecto de artículos sobre el derecho del mar una disposición acerca de la relación entre dicho proyecto y las convenciones bilaterales, pero mencionó la cuestión en su informe (A/3159, párr. 31). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar insertó una disposición idéntica en la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (A/CONF.14/L.52, artículo 25) y en la Convención sobre la Alta Mar (A/CONF.13/L.53, artículo 30) que dice: «Las disposiciones de esta Convención no afectarán a las convenciones u otros acuerdos internacionales ya en vigor, en cuanto a las relaciones entre los Estados Partes en ella.» Así pues, no se ha mencionado la relación entre estas convenciones y los futuros acuerdos entre los Estados. Tal vez pueda adoptarse la misma redacción para el artículo 65.

65. El PRESIDENTE, al resumir el debate, dice que la mayoría parece ser partidaria de la segunda variante del artículo 65, siempre que se supriman las palabras «y no impiden que se concierten otras convenciones bilaterales en el porvenir». Sugiere que el texto se remita ahora al Comité de Redacción, junto con las cuestiones de redacción que se han planteado durante el debate.

Así queda acordado.

66. El Sr. BARTOŠ explica que no quedará del todo satisfecho con este texto, que podría considerarse como una transacción destinada a asegurar que la convención multilateral no modificará las relaciones contractuales existentes entre los Estados. Sin embargo, teme que el resultado de esta disposición sea mantener en vigor ciertas cláusulas cuasi coloniales que existen en las convenciones consulares entre los países más adelantados y los que lo son menos: cláusulas que no coinciden con lo que él llamaría las normas fundamentales del derecho consular.

67. El Sr. YASSEEN dice que si la Comisión no puede adoptar el procedimiento propugnado en el duodécimo período de sesiones por alguno de sus miembros, es decir, que se agregue una cláusula en la que se salvaguarden expresamente los principios fundamentales del proyecto en relación con las convenciones presentes y

futuras, apoyará la sugestión del Sr. Padilla Nervo de suprimir el artículo 65. De esa manera el problema quedaría resuelto mediante la aplicación de los principios del derecho internacional en la materia. Pero también podría resolverlo de otra manera la conferencia de plenipotenciarios, como ocurrió en la primera Conferencia sobre el derecho del mar. Se trata, en realidad, de un problema en gran parte político, pues hay que determinar el valor que los Estados conceden a sus convenciones anteriores y la libertad que, en el futuro, se reservarán en relación con el proyecto de convención que se está examinando.

68. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que le han alentado las observaciones del Sr. François en apoyo del procedimiento sugerido por el Sr. Padilla Nervo. También él se siente obligado a destacar que la inclusión de una cláusula en las Convenciones sobre el Mar Teritorial y la Zona Contigua y sobre la Alta Mar fue motivo de que ciertos Estados tradicionalmente marítimos no las ratificaran, en vista de las relaciones contractuales que ya tenían con otros Estados. La inclusión del artículo 65 en el presente proyecto podría tener, muy probablemente, el mismo efecto.

69. El Sr. EDMONDS dice que se opone a la supresión de la última frase de la segunda variante aprobada ahora por la Comisión; hubiera preferido el texto original.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

610.ª SESIÓN

Miércoles 14 de junio de 1961, a las 10 horas

Presidente: Sr. Grigory I. TUNKIN

Relaciones e inmunidades consulares (A/4425; A/CN.4/136 y Add.1 a 11, A/CN.4/137) (continuación)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar los artículos adicionales que el Relator Especial propone incluir en el proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades consulares (A/4425).

ARTÍCULO 54 *bis* (Situación jurídica de los funcionarios oficiales de carrera que ejerzan una actividad comercial o profesional de carácter privado)

2. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que en su primer informe (A/CN.4/108) incluyó una disposición (párrafo 2 del artículo 35) relativa a la situación de los cónsules de carrera que ejercían una actividad privada lucrativa. Esa cláusula fue rechazada por la Comisión (559.ª sesión, en que se examinó como artículo 58). Sin embargo, las observaciones de los

gobiernos permiten suponer que se necesita una disposición de ese carácter en el proyecto pues algunos países, como los Estados Unidos, por ejemplo (A/CN.4/136/Add.3), permiten a los cónsules de carrera que se dediquen a actividades lucrativas además de sus funciones consulares. Al mismo tiempo, es evidente que los gobiernos tienen gran interés en no extender a esa categoría especial intermedia la totalidad de los privilegios e inmunidades concedidos a los cónsules de carrera que no ejercen ninguna otra actividad además de sus funciones consulares.

3. El problema no se plantea respecto de los agentes diplomáticos, a quienes el artículo 42 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (A/CONF.20/13) les prohíbe expresamente ejercer en el Estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio. Parece poco probable que los Estados acepten una prohibición análoga para los funcionarios consulares de carrera y propone, por lo tanto, que en vista de la práctica existente se incluya en el proyecto un artículo adicional que coloque a los cónsules de carrera que ejercen una actividad privada lucrativa en un pie de igualdad con los cónsules honorarios por lo que respecta a los privilegios e inmunidades consulares. El nuevo artículo diría así:

«Se asimilan a los cónsules honorarios los funcionarios consulares de carrera que, no obstante ser funcionarios de la administración pública del Estado que envía, ejerzan una actividad comercial o profesional de carácter privado.»

4. El Sr. YASSEEN dice que sería apropiado tratar a los funcionarios consulares de carrera que ejercen una actividad lucrativa del mismo modo que a los cónsules honorarios, pero debe aclararse en el texto que esa igualdad se aplica respecto de los privilegios e inmunidades. Además, sugiere que se suprima la frase «no obstante ser funcionarios de la administración pública del Estado que envía», que parece superflua.

5. El Sr. SANDSTRÖM expresa sus dudas de que se necesite dicha disposición, por cuanto la situación de estos cónsules de carrera podría ser reglamentada por el Estado que envía.

6. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que esta disposición estaría de acuerdo con la estructura lógica del proyecto y tendría en cuenta la práctica vigente.

7. Sin embargo, no está plenamente satisfecho con la redacción que ha propuesto el Relator Especial. La expresión «actividad profesional» es demasiado general. Por ejemplo, es inconcebible que un cónsul de carrera que dé una serie de conferencias en una universidad quede privado por ello de ciertos privilegios e inmunidades. Es evidentemente preferible la frase «actividad privada lucrativa».

8. El PRESIDENTE sugiere que se tome como modelo la redacción empleada en el artículo 42 de la Convención de Viena.

9. Sir Humphrey WALDOCK dice que no comprende muy bien cómo se puede amoldar el nuevo artículo en el plan general del proyecto, en el cual ya se han incluido disposiciones concretas que prevén el caso de los cónsules de carrera que ejercen una actividad privada lucra-